

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

41

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jahm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Señor,
Juez Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga - Valle
(Reparto)

E.

S.

D.

JOHNY ALEXANDER BERMUDEZ MONSALVE, mayor de edad, vecino de Cali (V), identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderado judicial de los (as) Sres. (as) **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA, ESTEPHANI CERTUCHE DIAZ, JESUS MARIA SALAZAR PINZON, LINA VANESSA SALAZAR BORJA Y ALEXANDRA BORJA MEDINA**, personas mayores de edad, vecinos de Tuluá (V), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes actúan en nombre propio, a su vez la segunda, el tercero y la cuarta, en representación de sus hijos menores de edad **SAMUEL SALAZAR CERTUCHE Y JESUS ENRIQUE SALAZAR BORJA**, y serán la parte demandante dentro de la presente, me permito instaurar demanda contra **LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)**, establecimiento público del orden Nacional, quien será la parte demandada, representados por el señor Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, con sede en la ciudad de Buga (V), o por quien haga sus veces al momento de la notificación personal; con citación del señor Procurador Judicial de la Corporación y del Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en ejercicio del Medio de Control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del C.P.A.C.A., para que se hagan las siguientes declaraciones:

I. DECLARACIONES Y CONDENAS.-

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a **LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)**, por la responsabilidad en el daño causado a los demandantes, con motivo de las graves heridas y la posterior incapacidad laboral causada a **FREDDY ALEXANDER SALAZAR**

42

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

BORJA, en razón a los hechos acontecidos el día 05 de septiembre de 2015, al ser víctima de agresiones con objeto contundente (Arma Blanca), en el miembro superior derecho con compromisos tendinoso, bíceps braquial y nervio radial, por uno de sus compañeros de reclusión. Suceso acaecido dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V), donde se encuentra recluso en su calidad de condenado.

SEGUNDA: Condenar a **LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)**, a pagar a favor de los demandantes, todos los perjuicios que han sufrido, consistentes en:

A.- A título de perjuicios morales, el equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo definitivo, para cada uno de los demandantes, es decir, **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, en calidad de víctima directa; **JESUS MARIA SALAZAR PINZON Y ALEXANDRA BORJA MEDINA**, en calidad de padres de la víctima; **LINA VANESSA SALAZAR BORJA Y JESUS ENRIQUE SALAZAR BORJA**, en calidad de hermanos de la víctima; **ESTEPHANI CERTUCHE DIAZ**, en calidad de compañera permanente, y **SAMUEL SALAZAR CERTUCHE**, en calidad de hijo de la víctima.

B.- A título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la víctima **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, con motivo de las lesiones y posterior incapacidad laboral que está sufriendo, en razón a las lesiones padecidas el día 05 de septiembre de 2015, al ser víctima de agresiones con objeto contundente (Arma Blanca), en el miembro superior derecho con compromisos tendinoso, bíceps braquial y nervio radial, por uno de sus compañeros de reclusión. Suceso acaecido dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V), donde se encuentra recluso en su calidad de condenado. Solicito se liquiden teniendo en cuenta las siguientes pautas:

NOTAR

43

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jahm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

- 1.- Un salario de Setecientos Mil Pesos Mensuales (\$700.000,00), que ganaba la víctima antes de ser recluido en el Establecimiento Penitenciario o lo que se demuestre dentro de la etapa probatoria. En subsidio el salario mínimo mensual legal vigente para el mes de septiembre de 2015, es decir, la suma de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Pesos Mensuales (\$644.350,00), más un veinticinco por ciento (25%) de prestaciones sociales. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado, la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se concilie, o se apruebe mediante auto la conciliación prejudicial.
 - 2.- La vida probable de la víctima según la tabla de supervivencia aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0110 del 22 de enero de 2014.
 - 3.- El grado de incapacidad laboral que fije la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, establecidas en los Decretos 917 de 1999 y 2463 de 2001.
 - 4.- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el mes de septiembre de 2015 y el que exista cuando se produzca la sentencia definitiva.
 - 5.- Las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.
- C.- A título de daño a la salud, el equivalente en pesos de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo definitivo, para la víctima **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**. Perjuicios que se configuran con motivo de las siguientes lesiones: **Herida con objeto contundente (Arma Blanca), en el miembro superior derecho con compromisos tendinosos, bíceps braquial y nervio radial.**

44

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

TERCERA: Que las cantidades liquidadas a las cuales se condene a las entidades demandadas, cobren intereses moratorios desde el mismo día en que quede en firme, hasta el día en que efectivamente se produzca el pago de esa condena. Esta solicitud la hago con base en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

CUARTA: LA NACION, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF hasta que se haga efectivo el pago.

II. HECHOS SUSTENTODE LAS PRETENSIONES.-

1.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, nació el día 29 de abril de 1991 en el Municipio de Tuluá (V), para la fecha de los hechos contaba con la edad de 24 años.

2.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** es hijo de **JESUS MARIA SALAZAR PINZON Y ALEXANDRA BORJA MEDINA**; hermano de **LINA VANESSA SALAZAR BORJA Y JESUS ENRIQUE SALAZAR BORJA**; compañero permanente de **ESTEPHANI CERTUCHE DIAZ**; y padre del menor **SAMUEL SALAZAR CERTUCHE**, en sus registros civiles de nacimiento se evidencia el parentesco de cada uno con la víctima directa.

3.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, guarda especiales relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua con sus padres, hermanos, compañera permanente e hijo, propias de un núcleo familiar, con quienes convivía bajo el mismo techo y son su único apoyo y sustento.

45

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

4.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V), en calidad de condenado.

5.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, el día 05 de septiembre de 2015 fue víctima de agresiones con objeto contundente (Arma Blanca), en el miembro superior derecho con compromisos tendinosos, bíceps braquial y nervio radial, por uno de sus compañeros de reclusión. Suceso acaecido dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V), donde se encuentra recluido en su calidad de condenado.

6.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, como consecuencia de las agresiones padecidas al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V), fue traslado a su dispensario y posteriormente de urgencia a la Fundación Hospital San José con sede en el Municipio de Buga (V), donde fue intervenido quirúrgicamente por la gravedad de las lesiones.

7.- El estado de salud de **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, al ingresar al INPEC era bueno y al momento de sufrir la lesión, se encontraba bien de salud y no tenía ninguna clase de incapacidad laboral ni física.

8.- La lesión sufrida por **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, le produce una grave incapacidad laboral, por ende, perjuicios de carácter morales, materiales y daño a la salud, constituyendo una grave falla en la prestación del servicio público del INPEC, porque fueron producidas al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V), por un compañero de reclusión. Ello significa que no se cumplió con las normas de cuidado y prevención que se deben tener al interior de un establecimiento carcelario para el cuidado de todos los internos. La anterior circunstancia genera la falla de la administración en este caso.

46

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

9.- La pérdida de la libertad coloca a la persona que la sufre en una situación de sujeción; y, da lugar al nacimiento de la obligación de resultado que tiene toda institución carcelaria y penitenciaria, en devolver al interno a la sociedad en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de la pérdida de la libertad. Los daños padecidos por **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad de Buga (V), producen una RESPONSABILIDAD OBJETIVA de la entidad demandada, estructurada en la PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD en razón al DAÑO SUFRIDO POR LOS RECLUSOS O PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.

10.- El tratadista Álvaro Bustamante Ledesma, en su obra titulada la Responsabilidad Extracontractual del Estado, define como Responsabilidad Objetiva, bajo la Presunción de Responsabilidad, los Daños Sufridos por Reclusos o Personas Privadas de la Libertad en el siguiente sentido:

"Una investigación Penal origina incomodidades para las personas vinculadas a ellas, las cuales pueden ir desde la captura para rendir indagatoria en los casos previstos por las normas procesales penales, hasta la pérdida de la libertad por una medida de aseguramiento o en razón de una sentencia condenatoria. La pérdida de la libertad coloca a las personas que la sufren en una situación especial de sujeción al poder del Estado que implica la limitación de algunos de sus derechos, pero al mismo tiempo impone a las autoridades públicas una obligación de resultado consistente en devolver al recluso a la sociedad en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de la retención o detención. En virtud de esa obligación el Estado tiene el deber de garantizar a las personas una seguridad efectiva para la conservación de su salud, integridad física y la vida, adoptando las medidas y empleando todos los medios necesarios para contrarrestar los riesgos que conlleva la permanencia en un lugar de reclusión y evitar todo acto que signifique una amenaza a los derechos que no están limitados como consecuencia de dicha reclusión.

"Esa obligación de seguridad no sólo hace referencia a la protección de las personas privadas de la libertad contra los abusos, violencias y agresiones de los servidores públicos que tengan alguna relación con ellas, sino también respecto de esos mismos actos provenientes de los compañeros de reclusión y aún de

47

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jahm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

terceras personas ajenas a las instituciones penitenciarias. En casos especiales la protección tiene como objeto defender a las personas de los daños que ellas mismas puedan causarse, como consecuencia de alteraciones o desordenes síquicos anteriores a la reclusión o adquiridos durante ese periodo.

"Por tratarse de una obligación de resultado su incumplimiento hace presumir la responsabilidad patrimonial del Estado y éste solamente podrá exonerarse acreditando una causa extraña, como la fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero. No son de recibo las alegaciones sobre la diligencia, prudencia y cuidado que alegue la entidad demanda por cuanto la falta o falla del servicio no es fenómeno que entra a considerarse para fundamentar la responsabilidad estatal. Esto no significa que en el evento de estar plenamente acreditada la negligencia, descuido o imprudencia de las autoridades carcelarias, el daño ocasionado y el nexo de causalidad, no puede hablarse de falla probada del servicio para deducir la responsabilidad extracontractual del Estado, pues en esta hipótesis por estar demostrada en todos sus elementos la responsabilidad no hay necesidad de acudir a su presunción. (Cursivas intencionales)

11.- Cuando la persona es privada de la libertad e ingresa a la Institución Penitenciaria, se encuentra en perfecto estado de salud, por lo tanto, la Institución Carcelaria que lo recibe debe devolverlo a la sociedad y a su familia en las mismas condiciones en que ingresó. Se crea así una especie de obligación de resultado, pues la entidad Penitenciaria y Carcelaria asume el compromiso de velar y proteger los derechos que no están limitados con la reclusión, es así como debe velar por su salud, vida e integridad física, previniendo agresiones de parte de compañeros de reclusión y la decadencia de su estado de salud.

12.- El hecho que da inicio a este proceso configura la teoría de la Responsabilidad Objetiva, por imputación de Presunción de Responsabilidad en razón al daño sufrido por los reclusos o personas privadas de la libertad, la cual ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, ello dice que una persona privada de la libertad o reclusa en establecimientos carcelario debe ser reintegrada a la sociedad en las mismas condiciones previas a la pérdida de la libertad o a su reclusión en establecimiento carcelario. Es así como se asume la obligación de resultado por parte de la autoridad pública, su incumplimiento a la obligación de protección que tiene para los

48

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

reclusos da lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado. Por lo tanto no puede obligarse al interno a asumir un daño, caso contrario debe ser indemnizado, para cumplir con el principio constitucional de la igualdad material.

En sentencias del 6 de diciembre de 1988, 25 de octubre de 1991, 5 de septiembre de 1994 y 21 de julio de 1995, se expuso los alcances de tal compromiso y las consecuencias que su incumplimiento genera para el Estado:

“Cuando las autoridades detienen a una persona que ha sido sindicada de algún delito, contrae para con ellas la obligación de mantenerlas a buen recaudo pero respetando su integridad física y moral y de devolverla, una vez cumplida la condena o antes si por razones de inocencia u otras causas recobra su libertad, en similares condiciones a las que tenía cuando entró.

“Esta obligación se proyecta en dos direcciones bien definidas: conservar la salud de las personas reclusas, brindándoles la atención necesaria para aliviar las enfermedades que llegue a adquirir durante la reclusión o bien para curar e impedir el agravamiento de las dolencias con que ingresan a los centros penitenciarios y protegerlos contra actos violentos que amenacen su vida e integridad personal, cualquiera sea su origen.

“La obligación de protección, vigilancia y cuidado de los reclusos es de resultado y no simplemente de medio, que se traduce en el compromiso de reintegrarlos a la sociedad en las mismas condiciones de salud en que fueron recibidos, salvo, claro está, las enfermedades y problemas y deterioros de salud inherentes al ser humano, a la luz de la ciencia médica.

“Por tratarse de una obligación de resultado, se presume la responsabilidad del Estado cuando se presenta el caso de un recluso que no es reintegrado a la sociedad en las mismas condiciones en las que ingreso a su detención.

“Bajo la perspectiva antes mencionada se viene manejando, por regla general, todos aquellos casos en los cuales los retenidos y reclusos sufren daños en su salud, vida o integridad personal, como cuando son víctimas de ataques por otros compañeros de reclusión, de atentados perpetrados por personas extrañas a la institución que ingresan a los sitios de detención, de reclusos que sufren enfermedades o pierden la vida por falta de atención médica oportuna y aun en los eventos de suicidios. Pero esto no quiere decir que cuando está plenamente demostrada la negligencia, descuidos o imprudencia de las autoridades carcelarias, no puede acudir al régimen de la falta o falla probada del servicio para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, como de hecho ha sucedido en algunos casos. Ello se entiende porque, como se ha explicado, la

49

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jahm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

*presunción de la responsabilidad es de aplicación subsidiaria al igual que la falla
presunta del servicio." (Cursivas intencionales)*

Al aplicar la jurisprudencia a este caso en concreto, tenemos que el recluso **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, sufrió una agresión con objeto corto punzante (arma blanca) por uno de sus compañeros de reclusión, suceso acaecido al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio de Buga (V).

13.- Favor aplicar el Principio IURA NOVIT CURIA.- Aplicación en procesos de responsabilidad. *"De señalarse que en virtud del principio iura novit curia, el juez está facultado para adecuar un régimen de responsabilidad diferente al aducido en la demanda, sin que con ello se estén modificando los fundamentos fácticos de las pretensiones; así lo precisó la Sala Plena de la Corporación en sentencia S-123 del 14 de febrero de 1995: " De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la Administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante..." (Responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.)*

14.- El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia dice: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."* En este caso, se produjo un daño antijurídico a la víctima quien no está en la obligación legal de soportarlo.

15.- La responsabilidad de la administración ha producido muchos daños a los demandantes. En relación a la tasación del perjuicio se debe tener en cuenta el artículo

16 de la Ley 446 de 1998, que consagra tres (3) criterios, el de la reparación integral del daño, la equidad y los criterios actuariales para que la condena no pierda su valor.

50

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

17.- **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, sus padres, hermanos, compañera permanente e hijo, han sufrido mucho moralmente con la grave lesión, el primero por tener que soportarlas, y los segundos por que entre ellos existen muy buenas relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua, además viven en la misma casa, por ello solicito como pretensiones de la demanda el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

18.- La víctima **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** sufre y sufrirá enormes perjuicios materiales porque la incapacidad que padece y las secuelas que le quedarán, le impedirán trabajar como una persona normal, con motivo a las graves heridas padecidas.

19.- En las pretensiones de la demanda se ha pedido el pago del equivalente en pesos a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como perjuicio de daño a la salud, para **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**. Perjuicios que se configuran con motivo de las siguientes lesiones: **Herida con objeto contundente (Arma Blanca), en el miembro superior derecho con compromisos tendinosos, bíceps braquial y nervio radial.**

20.- Existe una relación de causalidad entre la actuación de la administración y el daño causado a los demandantes.

21.- Se cumplió con lo normado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, donde la Procuraduría 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos en Cali - Valle, expidió certificación por falta de acuerdo conciliatorio.

22.- Los demandantes me confirieron poder para actuar.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES.-

Invoco como fundamentos de derecho las siguientes disposiciones.

51

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

*Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca*

Los artículos 2, 6, 11 y 90 de la Constitución Política de Colombia.

Los artículos 4, 5 y 8 de la Ley 153 de 1887.

Los artículos 4 y 5 de la Ley 16 de 1972.

Los artículos 140, 155, 156, 157, 161, 164, y del 179 al 187 del nuevo Código Contencioso Administrativo.

Los artículos 16, 23 y 31 de la Ley 446 de 1998.

Artículo 8 de la Ley 975 de 2005, y demás normas concordantes o complementarias.

IV. PRUEBAS.-

1.- DOCUMENTALES QUE SE ACOMPAÑAN JUNTO CON LA DEMANDA.

- a) Poderes conferidos por los demandantes para instaurar la presente demanda.
- b) Copia autentica de los registros civiles de nacimiento de la víctima directa, su hijo y hermanos.
- c) Declaración extrajuicio de la convivencia entre la víctima directa y su compañera permanente.
- d) Copia de los Derechos de Peticiones radicados ante la entidad convocada y la Fundación Hospital San José del Municipio de Buga (V), por el abajo firmante sin respuesta a la fecha.
- e) Copia de la respuesta al derecho de petición suscrito por la Dra. Cielo Rodríguez Holguín, Directora EPMSC Buga (V), con sus respectivos anexos, así:

- Cartilla Biográfica del demandante principal.
- Historia clínica del Hospital San José de Buga (V).
- Copia de las minutas de guardia.
- Informe sobre la existencia de investigación disciplinaria por los hechos objetos de la conciliación prejudicial.

52

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

f) Copia de la historia clínica de **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**.

g) Constancia expedida por el Sr. Procurador 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos en Cali (V), para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por agotamiento del requisito de procedibilidad por no existir acuerdo conciliatorio.

2.- DOCUMENTALES POR MEDIO DE OFICIO.

A.- Que se libre oficio al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Ciudad de Buga (V), ubicado en la Carrera 16 No. 32-97, para que envíe a su despacho certificación y copias auténticas y completas de los siguientes documentos:

- De los exámenes médicos realizados al interno **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica con C.C. No. 1.116.250.640 al momento de su ingreso de reclusión.
- De la historia médica del interno **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica con C.C. No. 1.116.250.640, en razón a la atención prestada por el Dispensario Médico del Establecimiento Carcelario.
- De la Investigación Administrativa y/o Disciplinaria adelantada por los hechos acontecidos el día 05 de septiembre de 2015, fecha en la cual el demandante **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica con C.C. No. 1.116.250.640, fue agredido con arma blanca por compañero de reclusión.
- De los libros y/o minutas de guardia o patio, correspondiente al día 05 de septiembre de 2015, donde se evidencia los sucesos en los cuales quedó herido de gravedad el interno **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

53

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Calcedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

con C.C. No. 1.116.250.640, al ser agredido con arma blanca por compañero de reclusión.

- Del Informe rendido por el Pabellonero de Guardia o Patio, correspondiente al día 05 de septiembre de 2015, donde se evidencia los sucesos en los cuales quedó herido de gravedad el interno **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica con C.C. No. 1.116.250.640, al ser agredido con arma blanca por compañero de reclusión.
- Del libro y/o minuta de guardia del Dispensario Médico, correspondiente al día 05 de septiembre de 2015, donde se evidencia los sucesos en los cuales quedó herido de gravedad el interno **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica con C.C. No. 1.116.250.640, al ser agredido con arma blanca por compañero de reclusión.
- Expedir certificación de la calidad de recluso que ostentaba el demandante **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA** quien se identifica con C.C. No. 1.116.250.640 para el día 05 de septiembre de 2015, fecha en la cual sufrió agresión con arma blanca por compañero de reclusión.

Me reservo el derecho de aportar las contestaciones de los oficios, antes o después de que sean elaborados.

3.- PRUEBA PERICIAL:

Examen médico – legal a **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, conforme lo estipula el Decreto 917 de 1999.

Respetuosamente solicito al señor Juez, se sirva ordenar que al joven **FREDDY ALEXANDER SALAZAR BORJA**, se ha valorado por los médicos de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, a fin de determinar la pérdida de su capacidad laboral, en razón

54

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

a las graves heridas padecidas en su humanidad, hechos acaecidos el día 05 de septiembre de 2015, al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad de Buga (V). Tal como lo dispone el Decreto 917 de 1999.

V. ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA.-

Estimo la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda, en menos de cuarenta y cinco de Pesos Moneda Corriente (\$45.000.000.00) porque según el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, la cuantía para efectos de competencia se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.

La demanda será de un proceso de PRIMERA INSTANCIA.

VI. COMPETENCIA.-

Según el artículo 156, numeral 6º, en los asuntos de Reparación Directa la competencia por razón del territorio se determinará por el lugar de los hechos o por el domicilio principal del demandado a elección del demandante.

Con base en lo anterior, es competente el Juez Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga - Valle, por cuanto los hechos acontecieron en jurisdicción de ese municipio.

VII. NOTIFICACIONES.-

- LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), se le puede notificar por medio del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario, con sede en la ciudad de

55

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo Oficina 913
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Buga - Valle, ubicado en la Carrera 16 No. 32-97, Según el artículo 23 de la Ley 446 de 1998.

- **A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION**, se le puede notificar por medio de su Director, con sede en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 7ª No. 75 - 66, Piso 2, Centro Empresarial C75, o por medio del correo electrónico procesos@defensajuridica.gov.co

- **A los demandantes** en la Carrera 30 No. 21-53 del Municipio de Tuluá (V).

- **Al suscrito** en la carrera 4ª No. 10 - 44 Edificio Plaza de Caicedo, Oficina 913, de la ciudad de Cali (V). Teléfono: 3395003, Celular 3165239179. O por medio de correo electrónico jabm755@yahoo.es

VIII. SUSTITUCION DE PODER.-

Dentro del presente caso, me permito sustituirle poder al Doctor ANDRES FELIPE POSSO ARANA, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.481.680 de Buga (V), portadora de la T.P. No. 244.618 del C.S. de la Judicatura, en los mismos términos de los poderes a mi conferido por los demandantes.

IX. ANEXOS.-

Todos y cada uno de los documentos enunciados en el acápite de pruebas, con copia para el traslado a los demandados, Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación con sus respectivos anexos, y una copia para el archivo del Juzgado, tanto escrita como en CD.

Del señor Juez, atentamente,


JOHNNY ALEXANDER BERMUDEZ M.

C.C. No. 16.511.335 de Buenaventura (V)
T.P. No. 133.160 del C. S. de la Judicatura

